

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500920170000701
Proceso:	Ordinario
Demandante:	Noelia del Socorro Monsalve Arroyave
Demandado:	PROTECCIÓN S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	24/03/2023
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 27/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTE	NOELIA DEL SOCORRO MONSALVE ARROYAVE
DEMANDADA	PROTECCIÓN S. A
ORIGEN	Juzgado Noveno Laboral Circuito de Medellín
RADICADO	05 001 31 05 009 2017 00009 01
TEMAS	Pensión de sobrevivientes
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por NOELIA DEL SOCORRO MONSALVE ARROYAVE contra SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>1</sup>

La señora Noelia del Socorro Monsalve Arroyave formula demanda contra Protección S.A pretendiendo se condene a esta a: **i)** el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su hijo Daniel Esteban Monsalve Arroyave, de forma retroactiva desde el 31 de octubre de 2015; **ii)** intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación de la condena; **iii)** lo ultra y Extra petita, y **iv)** costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus pretensiones en que su hijo Daniel Esteban Monsalve Arroyave quien falleció el 31 de octubre de 2015, laboraba en la empresa Flores de la Campiña S.A. devengando un salario mínimo, y se encontraba afiliado a Protección S.A., contando con 136 semanas de cotización. Cuenta que vivía con su hijo Daniel y otra hija menor de edad -no señala su nombre-; Daniel Esteban le suministraba lo necesario para su

<sup>1</sup> 01PrimeraInstancia; 02Expediente.pdf págs. 2/3

congrua subsistencia, además asumía el costo del arrendamiento que ascendía a \$190.000; el de los servicios públicos, el alimento, constituyendo tal aporte el que mantenía el hogar, pues siempre ha sido ama de casa, no posee bienes ni rentas, estaba afiliada como beneficiaria de su hijo en la EPS Coomeva, y pese a que convive con su compañero -no señala su nombre-, éste no aporta para el sostenimiento de ella, y aun cuando labora por horas en un cultivo de flores, dicha labor no es permanente y no le alcanza para tener una vida tranquila.

El 18 de julio de 2016 solicitó a la entidad el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, negada bajo el argumento de la no dependencia económica.

### **Protección S.A.<sup>2</sup>**

Acepta la fecha en que falleció el afiliado, así como su vinculación a la AFP y la densidad de semanas cotizadas al momento de su muerte, pero niega que la demandante tenga derecho a la pretensión deprecada, por no acreditar el requisito de dependencia económica respecto de su hijo fallecido, pues conforme a la investigación administrativa realizada, la demandante convivía con el señor Gonzalo Rojas, su compañero permanente desde hace más de 8 años, quien es trabajador activo y percibe ingresos económicos que le permiten garantizar la subsistencia de su grupo familiar; la demandante tiene además otro hijo, llamado Santiago Monsalve, quien también contribuía a los gastos del hogar, tal y como lo indicó en la investigación administrativa, debiendo entender que la eventual colaboración que realizaran los hijos correspondía a una contraprestación a los servicios realizados por la madre en beneficio de ellos, como la proporción de vivienda, arreglo de ropas, preparación de alimentos, sin que pueda desprenderse dependencia económica respecto de ellos, al estar cubiertas sus necesidades básicas por parte de su compañero permanente. Excepcionó: falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción.

### **Sentencia de primera instancia<sup>3</sup>**

El 6 de febrero de 2019, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia condenando a Protección S.A. a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivencia con ocasión al fallecimiento de su hijo, Daniel Esteban Monsalve, a partir del 31 de octubre de 2015, en cuantía de 1SMLMV, liquidando por concepto de retroactivo pensional, a partir de esa fecha y el 31 de enero de 2019, teniendo en cuenta 13 mesadas anuales, la suma de \$32'298.664. Ordenó a continuar pagando, a partir de febrero de 2019, una mesada pensional equivalente a \$828.116, sin perjuicio de los incrementos de ley. Ordenó el pago de intereses moratorios sobre dicho retroactivo a partir del 11 de mayo de 2016 hasta el momento efectivo del pago. Finalmente, condenó en costas a Protección S.A. fijando agencias en derecho en la suma de \$2'260.906.

Para fundamentar lo decidido, el Juez A Quo concluyó demostrada la dependencia económica de la demandante respecto de su hijo, en virtud de los elementos indiciarios

---

<sup>2</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente0920170007.pdf, págs. 53/65

<sup>3</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente0920170007.pdf, págs.107/109 y  
03AudienciasArts77y80Cptss0920170007.mp3

recaudados en el proceso, como la documental que certifica la calidad de beneficiaria a la EPS Coomeva de su hijo; las pruebas testimoniales de Astrid Helena Baena, quien es cónyuge del señor Duván Monsalve –hijo de la demandante-, Alfonso Zuluaga García, -tendero del mercado donde el causante compraba el alimento para su familia y Juan Diego Arbeláez, empleador de Duván Monsalve y ocasionalmente de Noelia del Socorro Arroyave, quienes dieron cuenta de que ésta no tenía recursos económicos estables que le permitieran solventar sus gastos vitales, y que con el fallecimiento del afiliado cambió la situación de la demandante, quien ya no podía pagar el arriendo donde vivía debiendo regresar a su pueblo natal para refugiarse en el hogar de su familia; y finalmente, la conclusión de la investigación administrativa realizada en el trámite administrativo, si bien es válida porque no fue objetada, tampoco concluye en que la demandante no dependiera económicamente del afiliado.

### **Recursos de apelación:**

**i) Protección S.A.** solicita se revoque lo decidido y se absuelva a la entidad de todas las pretensiones, bajo los siguientes argumentos:

**a)** La carga de la prueba que correspondía a la parte demandante no quedó satisfecha, pues quedaron dudas en torno a las manifestaciones rendidas por el testimonio rendido por la señora Astrid, quien incurrió en incoherencia con el testimonio rendido en la investigación administrativa realizada por la entidad, donde declaró que conocía al compañero permanente de la demandante, que estos convivían juntos, que éste realizaba aportes económicos considerables al hogar, pero en el marco del presente proceso, su relato es como si no lo hubiese conocido, y al ser preguntada por sus respuestas en la investigación no sabe qué responder, no niega lo dicho, ni refiere haber sido imprecisa, ello, aun cuando el juez de instancia no dio valor probatorio a la investigación administrativa, la activa nunca se opuso frente a ésta.

**b)** Adujo inconsistencia en la declaración de la señora Noelia, pues si bien ya reconoce la existencia de un compañero permanente, dice que esta relación se formó después del fallecimiento de su hijo, a sabiendas que dentro de la investigación se comprueba algo totalmente diferente, más aún cuando todos los declarantes con relación cercana a la familia coinciden en afirmar no solo la existencia del compañero sino también el aporte económico que él hacía a su casa incluso de \$240.000 mensuales, suma con la cual alcanzaba a cubrir el sostenimiento básico de su pareja la señora Noelia.

**c)** La autosuficiencia y dependencia material que alude el fallador, no quedó establecida, toda vez que, al momento de fallecer el causante, no se logró acreditar que éste asumiera todas las necesidades básicas de su madre. Se debe entender en cuanto al gasto de la alimentación incluido dentro del testimonio del señor Zuluaga, que es el hijo quien conoce a este señor y no su madre, por esto, es él quien se encarga de pedir los préstamos que incluso el fallecido no pudo sufragar. El actuar del joven corresponde a preocupación apenas natural de un buen hijo de familia que surge de la convivencia permanente con la madre. El endeudamiento se generó tanto antes como después del fallecimiento de Daniel, por ende, no se dilucida la diferencia clara de la situación de la madre antes y después de la muerte de su hijo.

d) Llama la atención que la demandante no reconozca las sumas de dinero percibidas realmente de su trabajo ocasional como recolectora de flores, dado que uno de los testimonios fue el de su empleador, quien refiere que ésta podría ganar entre \$50.000 y \$200.000 en una semana y ella dice que podría ser entre \$20.000 y \$50.000; lo cual califica de mala fe.

Finalmente, solicita que, de ratificar la condena, se modifique la sentencia en cuanto a la fecha en que se ordena el reconocimiento de intereses, debiendo contabilizar su causación a partir de los 2 meses siguientes de la sentencia a proferir, y no desde el 11 de mayo de 2016, toda vez que no se logró acreditar la dependencia económica respecto de su hijo.

### **Alegatos en segunda instancia**

Una vez corrido el traslado en esta instancia, tanto la activa, como quienes conforman la pasiva lo recorrieron oportunamente, así:

De un lado, **Protección S.A.**<sup>4</sup> refiere que se demostró en el sublite la existencia de una comunidad de gastos, dado que el sostenimiento del hogar estaba suplido por el compañero permanente de la demandante, con el cuál convivía desde el año 2008 y por la ayuda de su otro hijo Santiago; lo cual además se acreditó con el resultado de la investigación administrativa, donde los testigos no brindaron información sobre las circunstancias económicas dentro del hogar para concluir en una verdadera dependencia económica. No logró demostrarse el menoscabo en las condiciones socioeconómicas de la demandante después del fallecimiento de su hijo, ni se verificó el ingreso del afiliado, ni la forma de representación del aporte dentro del hogar, de ahí que no proceda lo deprecado, ni la imposición de intereses moratorios dado el correcto actuar de Protección S.A., puesto que, desde la solicitud de la prestación, la entidad realizó la verificación de las circunstancias de dependencia que consideró insatisfechas, deviniendo en la negativa de la prestación, por lo tanto se debe revocar la sentencia y condenar a la parte actora al pago de las costas del proceso en ambas instancias.

A su vez, la **demandante**<sup>5</sup>, solicitó se confirme íntegramente la sentencia proferida en primera instancia, indicando que el juez bajo sana crítica dio valor probatorio a la prueba testimonial recaudada, concluyendo que la actora no era autosuficiente sin los aportes brindados por su hijo fallecido, y la demandada no aportó prueba alguna para desvirtuar ello. Resalta que la AFP argumenta la mala fe de la activa, y que esta no atacó la supuesta investigación administrativa realizada, lo cual no resulta cierto, porque si se contradijo al traer testigos ante el juez a declarar sobre el entorno económico de la demandante, quienes conocían dichas circunstancias de primera mano; además el juez apreció idóneamente dicha investigación, que no fue fidedigno toda vez que no contiene siquiera las firmas de los declarantes, no dice dónde, cómo, ni cuándo se desarrolló la

---

<sup>4</sup>02SegundaInstancia; 04AlegatosProteccion0920170007.pdf

<sup>5</sup>02SegundaInstancia; 05AlegatosDemandante0920170007.pdf

entrevista, no registra cuáles fueron las preguntas, ni taxativamente las respuestas, dando solo una interpretación de una persona; no solicitó la AFP las declaraciones de los entrevistados, ni de quien dice haber realizado la entrevista, no pudiendo dársele el valor probatorio de altura, tampoco solicitó tacha de falsedad, pretendiendo refugiar la carencia de pruebas con las respuestas de la demandante en su interrogatorio, de la que no se derivó confesión. Sobre los intereses de mora indica que el criterio ya fijado por la jurisprudencia refiere que esos no se valoran por la buena o mala fe, sino de forma objetiva por su naturaleza resarcitoria.

## II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, en consonancia con los puntos que fueron objeto de apelación.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se restringe a determinar: **a)** La procedencia o no del reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la demandante con ocasión del fallecimiento de Daniel Esteban Monsalve Arroyave, en caso de concluir que sí, se analizará; **b)** la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

No se discute que el afiliado dejó causado el derecho a la prestación en favor de sobrevivientes, por cuanto, Protección S.A., al negar su reconocimiento y pago, arguye que lo hace porque la madre no dependían económicamente del causante para la fecha del fallecimiento<sup>6</sup>, más no aduce que la prestación no se haya causado, adicionalmente, al contestar la demanda acepta la densidad de semanas cotizadas al fallecimiento del afiliado.

### Hechos relevantes acreditados documentalmente

- Noelia del Socorro Monsalve Arroyave nació el 14 de noviembre de 1967<sup>7</sup>.
- Daniel Esteban Monsalve Arroyave nació el 18 de septiembre de 1993. Fue hijo de Noelia del Socorro Monsalve Arroyave<sup>8</sup> y falleció el 31 de octubre de 2015.
- Daniel Esteban Monsalve Arroyave se afilió en pensiones a Protección S.A. el 1° de abril de 2013<sup>9</sup>, donde realizó aportes hasta el 2 noviembre de 2015, cotizando un total de 136 semanas con base a 1SMLMV<sup>10</sup>.
- El 11 de marzo de 2016 la señora Noelia del Socorro Monsalve Arroyave diligenció

---

<sup>6</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente092017000007.pdf, págs.16/17 y 86/87

<sup>7</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente09201700007.pdf, pág.30. No se aportó copia del registro civil de nacimiento, pero sí copia de la cédula de ciudadanía de la demandante, que indica tal fecha la cual no fue discutida por la pasiva.

<sup>8</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente09201700007.pdf, págs.18/21

<sup>9</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente09201700007.pdf, pág.68 y 70

<sup>10</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente09201700007.pdf, pág. 26/28 y 89/90

ante Protección S.A. formulario de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su hijo Daniel Esteban Monsalve Arroyave<sup>11</sup>, en el que indica que vive en unión libre desde el 18 de octubre de 2008, y grupo familiar estaba conformado por madre y 2 hermanos del causante, que vivió bajo el mismo techo que éste durante 22 años, quien aportaba para los gastos de arriendo, servicios, alimentación, vestido y transporte en cuantía mensual de \$400.000, y que percibe ayudas de familiares por \$500.000 pero no percibía nada al momento del fallecimiento de éste.

- Copia de la investigación administrativa realizada por Alianza S.A.S. contratada por Protección S.A. donde se concluye que Daniel Esteban Monsalve Arroyave al momento del fallecimiento era soltero y no tuvo hijos, pagaba los gastos de su hogar con la colaboración de su padrastro Gonzalo Rojas y vivía además con su madre y sus hermanos Yeraldine y Santiago<sup>12</sup>.
- Mediante comunicación del 7 de junio de 2016 Protección S.A. negó a la demandante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en virtud del trámite administrativo adelantado en que se concluyó que la madre no dependía económicamente de su hijo fallecido<sup>13</sup>.
- Certificado expedido por Coomeva EPS el 16 de junio de 2016, en la que se observa que la señora Noelia del Socorro Monsalve Arroyave estuvo afiliada en calidad de beneficiaria de su hijo Daniel Esteban Monsalve Arroyave desde el 14 de noviembre de 2014 hasta el 4 de diciembre de 2015<sup>14</sup>.
- Los gastos de servicios fúnebres de Daniel Esteban Monsalve, estuvieron a cargo de Noelia del Socorro Monsalve Arroyave por medio de una afiliación que se encontraba a su nombre<sup>15</sup>

### **Declaraciones extra juicio**

Noelia del Socorro Monsalve Arroyave compareció ante la Notaria Única del Círculo del Carmen de Viboral Antioquia en dos oportunidades, el 2 de diciembre de 2015<sup>16</sup> y el 16 de junio de 2016<sup>17</sup>, en ambas oportunidades declaró que su hijo, Daniel Esteban Monsalve Arroyave, falleció por causa de muerte natural el 31 de octubre de 2015, era de estado civil soltero, no hacía vida marital con ninguna mujer, ni tenía hijos, este vivía con su madre bajo el mismo techo hasta su fallecimiento, se encontraba laborando en la Floristería La Campiña, y de lo recibido por tal labor, atendía la manutención de él y la suya, toda vez que es ama de casa, no labora ni recibe ningún tipo de rentas, salario fijo, o pensión fija.

---

<sup>11</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente092017000007.pdf, págs.75/77

<sup>12</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente092017000007.pdf, págs.78/85

<sup>13</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente092017000007.pdf, págs.16/17 y 86/87

<sup>14</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente092017000007.pdf, págs.22 y 92

<sup>15</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente092017000007.pdf, pág.88

<sup>16</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente092017000007.pdf, pág.12

<sup>17</sup> 01PrimerInstancia; 01Expediente092017000007.pdf, págs.14/15

### a) La demandante como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes

La calidad de beneficiaria invocada por la demandante está regulada en el artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, modificadora de los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993<sup>18</sup>, y exige la dependencia económica de los padres respecto del causante, para el momento del deceso.

En criterio de la H. Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la prestación de sobrevivientes constituye *“una garantía frente al estado de desprotección económica de un grupo de personas que no pueden subsistir con recursos propios y cuyas condiciones de existencia se encuentran ligadas a lo que proveía su descendiente fallecido”*<sup>19</sup>

Esa Corporación y la H. Corte Constitucional, han definido el alcance de la dependencia económica como el estado de necesidad que se predica de quien depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento, precisando que tal situación **no tiene que ser total y absoluta**<sup>20</sup>, porque en el contexto de un Estado Social de Derecho **no puede exigirse la configuración de estados de indigencia**, pero, sí debe existir una relación de necesidad entre el aporte y la vida digna del beneficiario, de modo que en el contexto jurisdiccional, el análisis debe enfocarse en que sin la ayuda del benefactor, la persona frente a quien se predica la dependencia económica entraría en un estado de afectación considerable de sus derechos fundamentales, por consiguiente, al faltar la ayuda del afiliado, la economía del petitionario se vería menoscabada.

Según lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial, precisó las siguientes sub reglas aplicables, en el estudio de estos asuntos<sup>21</sup>:

- La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada.
- Para concluir la dependencia, **es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento**, de modo que, al faltar el ingreso, se afecte el mínimo sostenimiento de la familia.

Ha expresado esa Alta Corporación que debe entenderse por dependencia económica *“la subordinación de una persona respecto de otra, por necesitar de su ayuda o auxilio*

---

<sup>18</sup> D) A falta de cónyuge, *compañero o compañera permanente* e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este;

<sup>19</sup> SI4599 de 2019

<sup>20</sup> En Sentencia C-111 de 2006, decidió “Declarar **EXEQUIBLES** los literales d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, salvo la siguientes expresión: *“de forma total y absoluta”*, que se declara **INEXEQUIBLE**

<sup>21</sup> La línea jurisprudencial se abandera por la sentencia hito, radicación N° 35.156 del 9 de junio de 2010 de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ratificada en las sentencias radicación N° 35.991 de 2011; N° 37.595 de 2011; N° 42.792 de 2011; SL 9640 de 2014; SL 8928 de 2014; SL 8406 de 2015 radicación N° 47.693 del 1 de julio de 2015, entre otras.



*para llevar una vida digna», puntualizando que dicha condición desaparece «cuando la persona es autosuficiente, por estar en capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos indispensables para su subsistencia en condiciones de dignidad»<sup>22</sup>.*

El concepto atiende a “**i**) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; **ii**) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo”<sup>23</sup>. “la dependencia de los padres respecto de sus hijos no debe ser absoluta, pero en todo caso la relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, debe ser de tal proporción que les impida valerse por sí mismos, aun cuando cuenten con recursos propios o provenientes de terceros”<sup>24</sup>.

Dicha postura, reiterada en sentencias como las SL 1016 de 2020, SL 10759 de 2020 y SL 2375 de 2020, entre otras, también enfatiza en que la dependencia económica no se desvirtúa porque los reclamantes tengan ingresos provenientes de terceros ajenos al causante del que se predica la dependencia o tengan vivienda propia.

Al tenor del artículo 167 del CGP, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen; en el caso, compete a la demandante demostrar que dependía económicamente de su hijo para el 31 de octubre de 2015<sup>25</sup>, fecha de su fallecimiento.

Con la intención de formar el convencimiento judicial en este sentido, la demandante solicitó que se recibieran los testimonios de Luz Adriana Giraldo Arbeláez, Alfonso Zuluaga García, Juan Diego Arbeláez Castañeda, Nancy Jael Monsalve Arroyave, Astrid Eliana Hernández Baena y Luis Alfonso Zuluaga García<sup>26</sup>. De ellos comparecieron Astrid Eliana Hernández Baena, Luis Alfonso Zuluaga García y Juan Diego Arbeláez Castañeda. Por su parte Protección S.A. solicitó el interrogatorio de parte de la demandante<sup>27</sup>. Las personas citadas como testigos comparecieron, al igual que la demandante lo hizo para absolver el interrogatorio de parte.

De las declaraciones se extrae la siguiente información relevante:

Noelia del Socorro Monsalve Arroyave <b>-Demandante-</b>	Estudió hasta quinto de primaria, es ama de casa y vive en Liborina Antioquia, en la vereda San Cristóbal. Para el momento del fallecimiento de su hijo, vivían con ella sus dos hijos, Daniel y Yeraldine Henao Monsalve. Señaló que hizo convivencia con Gonzalo Rojas Correa desde el año 2017. Indicó que su hijo Daniel Esteban tenía ingresos de 1SMLMV, el cual destinaba para los gastos de la casa, de ahí se pagaba el arriendo que era \$190.000, servicios de \$60.000, la comida y el colegio de su otra hija que le
---	---

22 Sentencia SL1219 de 2019, citando la 44601 de 2011

23 SI 848 de 2019, citando la SL 14923 de 2014

24 SI.4599 de 2019

25 01PrimeralInstancia; 01Expediente0920170007.pdf, pág.20

26 01PrimeralInstancia; 01Expediente0920170007.pdf, pág. 7

27 01PrimeralInstancia; 01Expediente0920170007.pdf, pág. 66

	<p>exigían mucho; precisando que fiaban la comida en la tienda, donde daban \$50.000 cada quince días, y para sus propios gastos personales destinaba alrededor de \$50.000 por mes. Cuenta que se dedicaba al hogar y trabajaba por días a la semana en un cultivo de flores, donde ganaba por horas y reunía alrededor de \$20.000 por dos días a la semana, teniendo que hacerlo cuando su hijo estuvo incapacitado por su enfermedad de leucemia, porque algunas cosas no las cubría el seguro; su hijo antes de estar vinculado laboralmente, también trabajaba cortando flores, pero esporádicamente. Refiere que, pasado un año del fallecimiento de su hijo, tuvo que irse a vivir a su pueblo natal Liborina, porque no podían pagar más arriendo donde vivían antes, en la vereda La Chapa del Carmen de Viboral, quedó solo con la obligación del colegio de su hija menor, teniendo que trabajar por días para poder asumir tales gastos. Niega que sus otros dos hijos, José Duván y Santiago le ayudaran económicamente, puesto que ya vivía lejos y tenía sus propias obligaciones. Finalmente indica que aún debe arriendos.</p>
<p><b>Astrid Eliana Hernández Baena</b> <b>-Testigo-</b></p>	<p>Es nuera de la demandante, casada con José Duván su hijo. Sabe que Daniel Esteban falleció alrededor del año 2016 el 31 o 30 de octubre, para dicho momento vivía con su mamá Noelia del Socorro y su hermana Yeraldine Henao Monsalve, quien para tal época estaba estudiando. Vivían en la Vereda la Chapa, y la declarante vivía a 5 cuadras de ellos. Refiere que el causante laboraba para una floristería de la Chapa que se llamaba la Campiña, tuvo alrededor de 1 año de incapacidades y en razón de su enfermedad, la señora Noelia comenzó a laborar por horas en un cultivo de flores, y lo devengado era según el trabajo que hiciera y de la demanda, podía hacer de a \$50.000 a \$150.000 semanales, pero eso no era diario, a ella solo la llamaban cuando la necesitaban, y no podía siempre porque tenía que acompañar a su hijo cuando estaba en el hospital. Daniel Esteban devengaba el mínimo, y le ayudaba mucho a la mamá, pagaba el arriendo, la luz, le ayudaba con la hermanita para el colegio, Daniel cuando salía de las quimioterapias y se sentía bien, iba a trabajar por horas, pues aunque estaba incapacitado y fue tanto tiempo, cuando ya estaba a cargo su pago de Protección S.A. le retuvo unos auxilios, por lo que en la tienda le fiaban mercados y en el arriendo le dieron una espera mientras le pagaban las incapacidades, también la gente de la vereda les ayudaba con mercado porque tenían una situación muy difícil. Niega que su cónyuge, José Duván ayudara a su madre Noelia, porque tienen un hijo y sus propias obligaciones, y su otro hermano, Santiago se fue a vivir a la Guajira, y no aportaba económicamente pues tenía como problemas de droga. Refiere que la demandante tenía un novio, que la acompañaba de vez en cuando, llamado Gonzalo, pero no conoce mucho porque eso era algo como privado. Conoce de la dependencia económica de la demandante respecto del causante, porque eran muy cercanos porque ella le ayudaba con los trámites</p>

	<p>de las incapacidades, y cuando le llegaba la quincena, él le decía que le diera esa plata a su mamá. Da cuenta que el sepelio lo cubrió la demandante porque estaba afiliado a una funeraria.</p>
<p><b>Luis Alfonso Zuluaga García</b> <b>-Testigo-</b></p>	<p>Conoce a la demandante hace más de 5 años, en razón que él siempre ha vivido en la Vereda La Chapa, donde ella también vivió con sus hijos, Daniel y Yeraldine. Conoce que Daniel falleció por leucemia, lo cual conoce porque tenía una tienda en la vereda, y la demandante le comentaba y era ella quien lo acompañaba a las citas médicas, él murió en el hospital y para ese momento trabajaba en Flores la Campiña, donde devengaba un salario mínimo, pero también estuvo incapacitado. La demandante se encargaba de cuidarlo, pero nunca la ha visto trabajando y su otra hija, Yeraldine tenía 15 o 16 años y estudiaba; tenía otros 2 hijos, Duvan que es casado y no indicó el otro nombre. Cuenta que la demandante y Daniel mercaban en su tienda cada 15 días, el mercado era entre \$150.000 a \$200.0000 quincenalmente, a veces llevaban unas cosas y otras le mermaban, a veces iba la demandante por él, pero siempre se entendía para el pago con Daniel; vivían en casa arrendada, gasto que conoce lo asumía Daniel porque este muchas veces le pedía fiado porque tenía que pagar el arriendo. Señala que, al fallecer Daniel, debían alrededor de \$3'000.000 en la tienda, y si bien este siempre le hacía abonos, le continuó fiando algunas cosas a la demandante, y otra gente le ayudaba con comida. Negó conocer al señor Gonzalo Rojas y manifestó que la situación de la demandante después del fallecimiento del causante, fue muy crítica y tuvo que irse porque ya tampoco podía pagar el arriendo, pues ella nunca tuvo más trabajo, que algunas horas en cultivos donde contratan por horas para despachar flores.</p>
<p><b>Juan Diego Arbeláez Castañeda</b> <b>-Testigo-</b></p>	<p>Fue empleador de Duván el hijo de la demandante, a quien conoció porque iba a hacerle la visita y Eliana la esposa de Duván trabaja con él en el proceso de flores de exportación. Cuenta que cuando tenían mucho trabajo autorizaba a Eliana para llamar a Noelia para que ayudara a maquillar la flor en fechas de mucho trabajo como San Valentín, día de madres, Semana Santa, lo que ocurrió más o menos entre 2014 y 2015, lo cual se remuneraba por tallos, dependiendo de la hora, que podía hacer \$50.000 a \$200.0000 en una quincena; Daniel también llegó a trabajar con él por días, pues cuando estaba incapacitado Duván le pedía llamarlo para que pudiera ganar lo de la comida, porque tenía el salario suspendido el salario en la empresa, y necesitaba plata para las quimioterapias, y a veces para que no tuviera que trabajar le daba \$20.000. Sabe que Noelia vivió con Daniel y Yeraldine, y Duván y Santiago ya no vivían con la mamá y no le ayudaban económicamente.</p>

De las afirmaciones de las declarantes, que resultan coincidentes con las hechas por la demandante al absolver el interrogatorio de parte, sin que se llegara a derivar de ésta

confesión alguna que no dependía económicamente de su hijo Daniel Esteban para el 31 de octubre de 2015 en que falleció, conllevan a formar el convencimiento judicial, así como concluyó el A Quo, en torno a la dependencia económica de la demandante respecto del causante.

Es de anotar que para Protección S.A. las versiones de los testigos no resultan creíbles, doliéndose porque no logró determinarse que el causante fuera quien solventara las necesidades básicas de su madre, pues el actuar del joven debe entenderse como una preocupación natural de un buen hijo de familia que nace de la convivencia permanente con la madre, pues el endeudamiento de la familia se vio tanto antes como después del fallecimiento de Daniel Esteban, no lográndose dilucidar la diferencia clara de la situación de la madre antes y después de la muerte de su hijo. Le llama también la atención en cuanto a no haber reconocido la demandante las sumas de dinero que percibía realmente de su trabajo ocasional, pues su mismo empleador aduce que podría ganar entre \$50.000 y \$200.000 a la semana, cuando ella refirió que solo era entre \$20.000 y \$50.000 lo que para la AFP evidencia mala fe de la demandante en el proceso. Además, refirió que los dichos de la testigo Astrid resultan incoherentes de cara a lo referenciado en la investigación administrativa, donde señaló que el señor Gonzalo Rojas con quien hacía vida marital la demandante, hacía aportes relevantes al hogar, pero en el proceso judicial actúa como si no lo hubiese conocido, al igual que lo señalado por la demandante quien reconoció la existencia de su compañero permanente, pero afirmando, contrario a lo dicho en la investigación administrativa, que la relación inició después del fallecimiento de su hijo.

Frente a tales inconformidades de la AFP recurrente, en esta sede se evidencia que:

- En torno a lo aducido en la investigación administrativa respecto del señor Gonzalo Rojas como compañero permanente de la demandante, ha de indicarse que, no puede atribuirse valor probatorio a las respuestas indicadas en tal trámite, para desvirtuar la dependencia económica, en tanto tal documento no está suscrito por quien elaboró la visita (que se indica fue realizada por Sara Camacho), si no por Diego Luis Saldaña Álvarez como Gerente de Alianza Investigaciones S.A.S., en él no obran las preguntas realizadas a los entrevistados, ni sus respuestas exactas, sino una síntesis de aquellas, lo que no permite tener certeza, claridad y contexto claro en cómo fueron preguntados los testigos, ni cómo fueron sus respuestas, tal y como lo resaló el apoderado de la demandante al formular los alegatos de conclusión en esta sede, y que tampoco está suscrito los entrevistados. Aun así, la existencia o no del compañero permanente en momento anterior o posterior al fallecimiento del causante, no desvirtúa por si sola la dependencia de la demandante respecto de su hijo, pues en la investigación administrativa se podría inferir si acaso, una dependencia parcial del compañero, pues solo algunos de los entrevistados refirieron que éste aportaba económicamente, pero no se determinó su cantidad, ni periodicidad, contrario a lo afirmado por la totalidad, respecto de Daniel Esteban en cuanto a que su aporte era constante en ese hogar, lo cual, valorado en conjunto con la prueba testimonial analizada denota subordinación económica relevante, esencial y preponderante de la aquí demandante respecto de su hijo para el momento del fallecimiento.

- Para la Sala si se logró acreditar de forma diáfana que el afiliado era quien solventaba las necesidades básicas no solo de su madre, si no del hogar, compuesto por ellos dos y su hermana menor de edad, a quien también contribuía para el Colegio, de ello dieron cuenta los testigos, quienes conocieron al joven Daniel Esteban, que devengaba un salario mínimo, y de sufragaba los gastos como comida, arriendo y servicios.
- Sobre la diferencia aludida en cuanto al valor percibido por el trabajo ocasional realizado por la demandante, ha de advertirse que no observa mala fe en el actuar de esta, puesto que esta de mutuo propio aceptó devengar ingresos por labores realizadas en un cultivo por días, donde lo devengado era según horas que realizara, indicando que ello podía variar, pudiéndose inferir que no siempre devengaba el mismo ingreso por tal actividad, máxime por ser ella quien cuidaba de su hijo en el hospital, como refirió el testigo Luis Alfonso Zuluaga, da lugar a entender que en algunas ocasiones pudiera percibir más y en otras menos.

Atendiendo al alcance hermenéutico del concepto de dependencia económica analizado anteriormente, es claro para la Sala que no debe ser total y absoluta, al resultar improcedente predicar estados de indigencia en el contexto de un Estado Social de Derecho. Basta con demostrar una afectación sustancial a las condiciones materiales de vida o la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que permita a los beneficiarios obtener unos ingresos para vivir de manera digna<sup>28</sup>.

Y es precisamente este aspecto el que se probó suficientemente en el plenario, sobre todo con la prueba testimonial la cual merece credibilidad a esta Sala por apreciarse con claridad la relación de necesidad que se predica para concluir en la dependencia económica de la demandante frente al afiliado fallecido, de quien además fue su beneficiaria en salud, encontrándose plenamente acreditada la importancia del sustento que brindaba el causante para su madre, pues contrario a lo aducido por la recurrente, se tiene que el estado de necesidad del grupo familiar era tal, que el solo ingreso del afiliado no lograba cubrir la totalidad de gastos, debiendo endeudarse para adquirir los alimentos, situación agravada luego de su fallecimiento, quedando avocada en retornar a su pueblo natal por la imposibilidad de asumir el pago de arriendo del lugar donde vivía con su hijo en Carmen de Viboral.

En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión **confirmará** la decisión proferida por el Juez de primera instancia, pues se acreditaron en suficiencia los presupuestos normativos para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante.

Así las cosas, se actualiza el retroactivo de la referida prestación económica, así:

---

<sup>28</sup> Sentencias T-491 de 2013. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-732 de 2012. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-111 de 2006. MP. Rodrigo Escobar Gil.

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	3	\$ 644.350	\$ 1.063.178
2016	13	\$ 689.454	\$ 4.481.451
2017	13	\$ 737.717	\$ 4.795.161
2018	13	\$ 781.242	\$ 5.078.073
2019	13	\$ 828.116	\$ 5.382.754
2020	13	\$ 877.803	\$ 5.705.720
2021	13	\$ 908.526	\$ 9.085.260
2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023	3	\$ 1.160.000	\$ 3.480.000
TOTAL			\$ 52.071.596

Por tanto, Protección S.A. adeuda a la hoy demandante, por concepto de mesadas pensionales causadas desde el 1° de octubre de 2015 al 31 de marzo de 2023, en razón de 13 mesadas anuales y con base a un salario mínimo legal mensual vigente, la suma de Cincuenta y Dos Millones Setenta y un Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos (\$52.071.596).

Del retroactivo pensional se autoriza descontar las cotizaciones destinadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo decantado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia<sup>29</sup>,

**b) Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.**

Se encuentra legalmente prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993<sup>30</sup> la causación de intereses moratorios en favor de los (a) pensionados (a), ante la tardanza de la administradora de pensiones, en el pago de las mesadas, dentro de los términos legales, que para la pensión de sobrevivientes es de dos (02) meses contados a partir de la reclamación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001.

En el asunto conocido por la Sala, ha transcurrido mucho más de 2 meses desde el momento en que se reclamó el derecho pensional sin que se haya materializado su reconocimiento. Recurre la AFP la condena emitida desde la primera instancia, por no considerarlos causados, lo cual deviene insuficiente en atención a que, la pensión se sobrevivientes fue negada aduciendo ausencia de dependencia económica, a pesar de haberse adelantado una investigación que daba cuenta de que si bien aquella no era absoluta, mínimamente el hijo de la demandante, quien convivía con ella, era el encargado de asumir la mitad de los gastos del hogar, en tanto aportaba para el

<sup>29</sup> En las sentencias de SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264, entre otras.

<sup>30</sup> El art.141 de la Ley 100 de 1993 dispone que “a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.

arrendamiento, servicios públicos, créditos y además para pagar el colegio de su hermana menor de edad.

Los intereses moratorios se están causando desde el 11 de mayo de 2016<sup>31</sup> hasta el día anterior a aquel en que se efectúe el pago de lo adeudado.

En este punto se **confirmará** la sentencia venida en apelación.

### III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por las demandadas han quedado implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción, que no operó, al no haber transcurrido entre la causación de la prestación, su reclamación y la radicación de la demanda, el periodo de tres años a que refieren los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

### IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. por haber resultado vencida en su recurso. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2023.

### V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### RESUELVE

**PRIMERO: Confirmar** la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el 6 de febrero de 2019, en el proceso ordinario laboral de doble instancia, promovido por Noelia del Socorro Monsalve Arroyave contra Protección S.A.

**SEGUNDO.** Actualizar el valor de la condena, precisando que, al 31 de marzo de 2023, Protección S.A. adeuda a la demandante, la suma Cincuenta y Dos Millones Setenta y un Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos (\$52.071.596). La mesada pensional se continuará pagando en 2023 en el equivalente a un millón de pesos (\$1.160.000,00), sin perjuicio de los aumentos anuales del art.14 de la Ley 100 de 1993.

Del retroactivo pensional se autoriza descontar las cotizaciones destinadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

---

<sup>31</sup> 01PrimeraInstancia;01Expediente092017000007.pdf, págs.75/77

**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. por haber resultado vencida en su recurso. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2023.

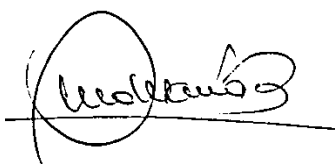
Notifíquese por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN